

Crece la resistencia

EDITORIAL

Miles de trabajadores de la hostelería se han manifestado este domingo, 8 de noviembre, en Bilbao, junto a pequeños empresarios, contra las medidas restrictivas antidemocráticas y antisociales promulgadas por el Gobierno Vasco, en nombre de la lucha contra la pandemia (una justificación con la que, al parecer, todo vale). En Cataluña, de viernes a lunes de madrugada se impone un confinamiento municipal –que ya padece Andalucía, Cantabria y País Vasco– mientras los días laborables los transportes públicos están abarrotados. Y todo eso cuando en los establecimientos de restauración, según el Ministerio de Sanidad, ha habido desde junio un total de 135 brotes, con 2.167 contagiados, y en los centros de trabajo 1.511 brotes, con 18.103 contagiados.

En Madrid el confinamiento de los barrios obreros persiste. En este país dividido en 17 autonomías se aplican medidas diferentes, muchas de ellas con escasa lógica sanitaria, pero muchas con un objetivo común, culpabilizar a la población, sin dotar de medidas suficientes a la sanidad pública agotada y sin recursos.

¿Qué pretenden?

Sin duda evitar una explosión social, porque la población trabajadora sufre de forma selectiva estos ataques. Y, por lo demás, el gobierno pretendidamente progresista atiende por encima de todo a las exigencias del gran capital y la Monarquía. La prensa especializada no ha dudado en enumerar las grandes empresas que se van a beneficiar de los “fondos europeos” mientras los asalariados pierden entre un 15 y 20 por ciento de su poder adquisitivo.

Los portavoces del Gobierno no dudan en calificar a quien se manifiesta contra las medidas restrictivas como provocadores y agentes de la extrema derecha, vieja acusación contra quien defiende las reivindicaciones “gobierno quien gobierne”. Claro está, buena parte de la indignación ha de manifestarse sin un marco organizado donde expresarse, por la negativa y renuncia de las organizaciones mayoritarias a defender las reivindicaciones, escudándose muchas veces en la pandemia. Hemos visto el último fin de semana manifestaciones de todo tipo, algunas de ellas directamente organizadas por provocadores de todo tipo, como la de los “policías por la libertad”.

Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial de Davos (que reúne anualmente a los magnates financieros de todo el mundo) plantea que lo que “me preocupa es el riesgo de estallido de una crisis social”. En efecto, es esto lo que se está incubando en el país y las diferentes manifestaciones de la semana pasada en 20 ciudades son, sin duda, los primeros signos. Sin duda existen provocadores de la extrema derecha, pero no son la causa, sino que, en muchos casos, aprovechan las convocatorias. Y es que la indignación social existe –y crece– y no es el producto artificial de ninguna “mano negra”.



Arriba, los estibadores se concentran en el puerto de Bilbao, y abajo los hosteleros recorren sus calles



De las reivindicaciones al necesario cambio político

Lo evidente es que la crisis es utilizada para romper los derechos existentes, para destruir los convenios colectivos, el salario, los servicios públicos. Las promesas tardías del Gobierno, como la anulación del artículo 315.3 contra el derecho de huelga (que se produce después de la batalla desarrollada desde hace 6 años) y algunas medidas solo son el producto de la manifestación incesante del personal sanitario y de la campaña desarrollada desde hace años en defensa del derecho de huelga. Esto demuestra que una actitud decidida de las organizaciones sindicales, en vez de la defensa incondicional del Gobierno, permitiría avanzar en la satisfacción de las reivindicaciones.

La indignación social no encuentra cauces, ante la cerrazón de partidos y dirigentes sindicales. Por eso, la propuesta lanzada por el encuentro del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos para aunar la lucha por las reivindicaciones, las libertades y los derechos con el combate por un cambio social y político, por la República, busca ayudar a dirigir la indignación hacia una salida democrática positiva.

DESTACADOS

- ¿Son los presupuestos que hacen falta?, [página 2](#)
- Sanidad, colapso y resistencia, [página 3](#)
- Defender el poder adquisitivo de los funcionarios, [página 3](#)
- En defensa de la industria, [página 8](#)
- COESPE: no al Pacto de Toledo, [página 9](#)
- Portugal: salvar el Servicio Nacional de Salud, [página 11](#)

7 DE NOVIEMBRE:

Encuentro estatal por los derechos, por las libertades, por la República, [páginas 6 y 7](#)

ESTADOS UNIDOS:

Biden gana, la crisis institucional continúa, [página 12](#)

Propuesta gubernamental de presupuestos no son los que la gravedad de la situación exige

La situación social es de una gravedad extrema: el número oficial de desempleados supera los 3,7 millones, por encima del 16% de la población activa, el 44% de la juventud. Añádase la amenaza sobre los 728.000 trabajadores en ERTE. Y la brutal precariedad, que no deja de extenderse. El FMI estima que no se revertirá la destrucción de empleo hasta 2026 (en 2021 sólo se recuperarán uno de cada cinco empleos perdidos).

En los últimos meses ha brillado por su ausencia toda acción del Gobierno que, realmente, enfrentara las graves carencias sanitarias resultado de años y años de recortes. Tampoco de cara a la crisis social. La programación de las cuentas públicas para el año próximo es, sin duda, una oportunidad para hacerlo. Según Pedro Sánchez, “*son unos presupuestos progresistas y son los presupuestos que nuestro país necesita*”. ¿Es cierto u ocurre lo mismo que cuando en marzo declaró el gobierno que había prohibido los despidos, lo que era completamente falso?

El llamado gasto social aumenta, por ejemplo 8.578 millones en las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, un 11,3%. Pero considerando el impacto de la

pandemia y los recortes acumulados durante los años anteriores, ese aumento no puede resolver unas necesidades que se cifran en 22.000 millones. Lo mismo ocurre en ámbitos como la enseñanza o el transporte. Además, no se garantiza que el gasto previsto, como en enseñanza, vivienda, atención a ancianos y a la infancia, etc., se destine exclusivamente al servicio público y no se desvíe al negocio privado. Como ocurre con el gasto en industria, del que se benefician multinacionales que salen corriendo a las primeras de cambio, con la consiguiente destrucción de empleo. O con el gasto agrícola, en gran parte monopolizado por el gran capital y las grandes fortunas latifundistas.

El gobierno no cuestiona el gasto militar, sino que lo aumenta hasta 9.072 millones, un 5% (aunque si se cuenta bien, incluyendo partidas de otros ministerios que realmente le corresponden, se eleva al doble). Tampoco el de la Casa Real, que aumenta un 6,9% mientras que para empleados públicos y pensionistas lo limita a un 0,9%.

Por el lado de los ingresos, pese al griterío de la derecha, las medidas son verdaderamente testimoniales, como el aumento de 3 puntos en el IRPF para las rentas del



capital de más de 200.000 euros y de 2 puntos para las del trabajo de más de 300.000 euros. Y de una tributación mínima del 15% para las SOCIMI, sociedades organizadas para especular con la necesidad de vivienda. ¡Un 15% cuando el asalariado medio en Madrid paga el 21,3%! Además, el plan presenta debilidades serias. Desde la previsión de ingresos tan optimista, hasta la condicionalidad de los fondos que finalmente dote la UE.

Estos presupuestos refrendan la prioridad del Gobierno durante todo su mandato: favorecer los intereses del capital, con pequeños gestos hacia la mayoría (que, además, son mucho menores que lo anunciado). Y lo que se necesita es una política acorde a las necesidades, esto es, que ponga todos los medios al servicio de la mayoría, caiga quien caiga.

Xabier Arribabalo

15.000 despidos, de momento, en la banca Entrevista a Roberto Tornamira, de UGT

Información Obrera: *La prensa publica declaraciones tuyas sobre la suma de planes de despidos de los bancos, que se añaden a la eliminación ya de más de 100.000 puestos de trabajo. ¿Qué actitud de los trabajadores puede ayudar a cambiar esta situación?*

Roberto Tornamira: El sector financiero tiene una larga tradición de lucha y movilización. Los sindicatos de clase superamos ampliamente la mayoría absoluta en las mesas de negociación. Los delegados y delegadas de los sindicatos desarrollan una gran actividad en los centros de trabajo.

Sin embargo, la actitud de lucha ha ido amainando desde principios del siglo. Eso obedece a una serie de factores: la implantación de retribuciones variables que suponen un porcentaje importante del salario, la expectativa de progreso en la carrera profesional (hasta 2008) y la incorporación de nuevas generaciones de trabajadores que han sustituido a los que tenían interiorizada la movilización como método de lucha.

No obstante, ante situaciones concretas, en los procesos de la crisis de 2008 en adelante, sí se han llevado a cabo movilizaciones: ante el Banco de España, ante las sedes

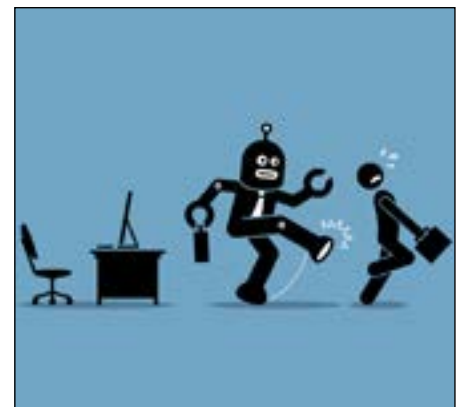
de las entidades con ERE y ante las juntas de accionistas.

La destrucción de empleo está siendo brutal, lo que contrasta con la ingente cantidad de dinero público que se ha metido en muchas entidades para sanearlas antes de integrarlas en otras más grandes. Esta situación debiera hacer rebrotar la actitud luchadora. Hay que seguir exigiendo la derogación de las reformas laborales: la hemorragia de pérdida de empleo la facilita en gran medida la facilidad extrema que se dio a las empresas para llevar a cabo un ERE.

No se debe olvidar que la UGT se constituyó en este sector en 1931, con la Federación de Banca y Bolsa, presidida por Amaro del Rosal: quizás esto ayude a entender las buenas condiciones de trabajo, consecuencia de muchos años de lucha y organización sindical.

IO: *¿Qué consecuencias tiene el cierre de oficinas y servicios para la población?*

RT: Son nefastas. En los últimos 12 años se ha cerrado el 50% de la red, generando una nueva exclusión financiera, al dejar a la población de más de la mitad de los municipios sin servicios bancarios.



Siempre ha habido exclusión en función de la capacidad económica del cliente, ahora la hay también en función de dónde vive. Hasta el estallido de la crisis de la década pasada, se valoraba como positivo que una entidad tuviese una extensa red de oficinas; era sinónimo de calidad de servicio.

El cierre de oficinas y la destrucción de empleo que lleva aparejado no es porque caiga el negocio: cuando dos entidades se fusionan, suman el negocio de las oficinas coincidentes, lo que no suman es a sus trabajadores. Social y políticamente, la concentración del negocio debiera preocupar, pues se ha conformado un oligopolio financiero; las cinco entidades más grandes aglutinan más del 70% del negocio.

Entrevistó M. Cuso

Sanidad, del colapso a la resistencia



Los datos de los centros sanitarios son abrumadores. En Atención Primaria las consultas están colapsadas, los profesionales desbordados y hay una demora creciente de las citas. La atención ha pasado a ser telefónica en la mayoría de los casos, cuando hay muchos problemas de salud que requieren el contacto directo y la exploración del paciente por parte del médico. En los hospitales, el número de ingresados por

COVID no deja de crecer y en algunas comunidades las UCI ya están en un 50% de su ocupación por pacientes COVID.

Ahora, sintiendo que la pandemia se les ha ido de nuevo de las manos, los gobiernos toman medidas “urgentes” a toda prisa, tanto para confinar a población como para adaptar los centros sanitarios. Para habilitar camas para los pacientes COVID se cierran camas de otras especialidades, se anulan

intervenciones quirúrgicas, incluso oncológicas, se desplaza a médicos de una especialidad a prestar servicios en otra. Y se preparan traslados de médicos y enfermeros a hospitales de campaña o centros geriátricos medicalizados.

Es el resultado de los recortes que ha sufrido la sanidad durante años, y de la inacción de los gobiernos. Los 99 días de confinamiento que sufrió la población y los primeros meses de la proclamada “nueva normalidad” se debían haber utilizado para adaptar los centros sanitarios, para aumentar las plantillas en los centros de salud, para contratar y formar rastreadores. Y no se hizo nada.

El personal de la sanidad está harto, agotado y desmotivado. Y se multiplican las acciones de resistencia, a pesar de que en muchos casos los sindicatos no convocan o aluden a la pandemia y las restricciones para limitarlas y de la división sindical en las convocatorias, cuando las hay. Aún así, hay decenas de movilizaciones de la población en los barrios ante sus centros de salud y movilizaciones del personal para demandar EPI adecuados, para exigir más personal, para protestar por las medidas arbitrarias de movilidad.

¿No sería hora de que las organizaciones dieran un paso adelante y organizaran una movilización unida de trabajadores y usuarios para salvar la sanidad pública?

Luis González

Defender el poder adquisitivo de los funcionarios

Los empleados públicos perdimos desde 2010 hasta 2017 el 12,9 % de nuestros salarios. Una nueva pérdida de poder adquisitivo, cuando se nos decía que habíamos salido de la crisis financiera (reflotando a los bancos con nuestros salarios y los recortes de servicios públicos), podía traer consecuencias no deseadas para el gobierno del PP, muy débil ya en esos momentos.

En este contexto, los sindicatos de la Función Pública firman un acuerdo por tres años (2018 a 2020) que mantenía las tasas de reposición y no suponía creación de empleo, pero que incluía un acuerdo salarial que vinculaba el salario a la evolución del PIB, del déficit y de la deuda pública. En este marco, el aumento salarial estaría entre el 6 y el 8 %. A la firma del acuerdo siguió una campaña de propaganda que pretendía que los empleados públicos iban a recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido, si no todo lo perdido.

En el Programa de Estabilidad 2018-2021, el ministro Montoro estimaba un incremento medio del IPC del 1,6 % anual esos tres años; es decir, que la recuperación del poder de compra de los funcionarios, si se cumplían las previsiones del Gobierno, oscilaría entre el 1 y el 3 % como máximo. Por tanto, aunque ya resultaba aventurado hacer

previsiones económicas a un año vista, se trataba de un acuerdo de contención salarial de los empleados públicos, que no cumplía su reivindicación de recuperar el poder de compra perdido, y que proporcionaba un balón de oxígeno al Gobierno mediante el llamado «diálogo social».

Aunque el acuerdo no supuso ninguna recuperación del poder de compra durante su primer año de vigencia, las previsiones no se han cumplido porque la inestabilidad y la crisis dislocan la economía, a lo que se ha añadido este 2020 la pandemia de COVID-19. El 2019 se cerraba con una inflación del 0,8 %, y este año el IPC presenta cifras negativas y puede cerrarse con una deflación del 0,4 %. Esto significa que los empleados públicos habríamos recuperado en 2019 el 1,8 % y el 2,4 % en 2020, un 4,2 % en total. Entre el 4,2 y el 12,9 %, nos falta recuperar un 8,7 % del poder de compra de nuestros salarios.

El primero que reaccionó en contra de esta recuperación del poder de compra fue el Gobierno: la ministra de Hacienda afirmó en septiembre que había que congelar el salario de los funcionarios porque habían recuperado poder adquisitivo, en parte un globo sonda. Pero las disputas en el seno del Gobierno y, sobre todo, la movilización del personal de la sanidad pública, le hicieron

retroceder y proponer en los PGE una subida del 0,9 %, igual a la inflación prevista.

En su comparecencia en el Congreso, el gobernador del Banco de España, afirmó que el Gobierno no debería subir el salario de los funcionarios. Expresaba la opinión de un sector del capital financiero, pero también daba un apoyo indirecto a la medida. Pues habría quienes pensarán que su crítica hacía positiva la subida del 0,9 %, y la polémica se desplazaría así hacia sus declaraciones, dejando pasar una subida inaceptable.

Los dirigentes de los sindicatos de la Función Pública han declarado que el incremento del 0,9 % no es aceptable, que no se ha negociado con ellos y reclaman una subida del 8 %. ¡Eso queremos todos!; pero no se ha organizado ninguna movilización, ni siquiera mínima, para lograrlo, y los representantes sindicales acuden a las mesas de negociación de las CC. AA. dando por hecha la subida del 0,9 %, como algo que no se puede cuestionar porque es lo decidido por el Gobierno.

Es necesario organizar asambleas, con participación de los sindicatos, para que se decidan las acciones a llevar para defender las reivindicaciones que nos unen y arrancar esa subida del 8 %.

Blas Ortega

¡Fuera las empresas de la educación pública!

Hace unas semanas *El País* publicaba una noticia con el siguiente titular: “*Google, también a por las universidades: crea sus propias titulaciones por 250 euros*”. Y, para colmo, la ministra de Educación y Formación Profesional tuiteaba sin pelos en la lengua unos días más tarde: “*La alianza público-privada es vital para que la educación sea la fuerza transformadora que una sociedad moderna y abierta necesita*”, con mención especial a Google, Vodafone, La Caixa o Endesa. Igualmente, el actual ministro de Universidades, Manuel Castells, desde su llegada al ministerio ha dejado bien claras sus intenciones: poner la educación universitaria al servicio de las empresas, bajo el engañoso pretexto de que “*el modelo educativo está obsoleto*”, el mismo mensaje con el que se consiguió implantar Bolonia.

Pero por detrás siempre ha habido una lógica. El artículo que mencionábamos al comienzo lo deja bien claro, “*Google quiere ser juez y parte tanto del mercado laboral como del sistema educativo*”. Y, como

Google, el resto de empresas. Frente al vertiginoso mercado laboral, cada vez más liberalizado y desregulado a escala mundial hasta límites inhumanos, en donde se permite la existencia de trabajadores pobres y contratos de cero horas (sí, no hay ningún error, pero sí dos oxímoron), la educación superior se presenta como un lastre para ellas. Para qué estar cuatro años estudiando en un grado (después de quitarnos los cinco de licenciatura), aprendiendo contenidos que tal vez no sean necesarios en los innumerables trabajos por lo que tendremos que pasar, a cambio de salarios de mierda. Qué le importa a Google el hecho de aprender o no a reflexionar, de estudiar la historia con una mirada crítica o tal vez la bárbara lógica del capitalismo. En realidad, probablemente también le importe. ¿No es más lógico para estas empresas entrar a competir con las universidades mediante unos “*certificados profesionales de seis meses*” que otorguen “*la misma validez que un grado de cuatro años*”, en donde se vomiten las cuatro pautas que deben utilizarse en su empre-



Rueda de prensa del Ministro de Universidades, Manuel Castells

sa y, al mismo tiempo, se nos niegue el derecho a una formación amplia? Es un negocio redondo. Por un lado la privatización total de las universidades y, además, como efecto inmediato, la creación de un ejército de trabajadores atados de pies y manos a esta implacable lógica empresarial.

Y el colmo, como decíamos, es que los dos ministros actuales de educación básica y superior abran las puertas de par en par de la universidad pública a estas multinacionales. ¿Qué mandato representan? Defendamos nuestros derechos.

Álvaro, estudiante de posgrado

Los jóvenes también decimos: ¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

Hace un año aproximadamente veía en televisión cómo grandes oleadas de personas llegaban a Madrid de diferentes partes de España. Por largos días marcharon desde distintas comunidades anunciando su completo rechazo a los acuerdos del Pacto de Toledo. En principio no entendía el porqué de lo que hacían. A grandes rasgos, sabía que el dinero que durante toda su vida laboral fueron cotizando los y las pensionistas no les ha sido devuelto. O mejor dicho, ha sido robado por el propio Estado.

Pero es que, aunque esa sea la premisa principal, se esconde algo más oscuro e incluso, cuando lo llegué a entender mejor, aterrador. Y no es una exageración. El dinero cotizado de los trabajadores en la seguridad social ha cubierto gastos que salen, y por lejos, de su propósito principal. Todo el peso de la financiación de los gastos que debe cargar el Presupuesto del Estado va, en demasía, a las manos de la Seguridad Social. Sin embargo, aunque esta sea la verdadera causa, no es la que se difunde. Y en lugar de eso, se acusa a la elevada rentabilidad de las cotizaciones sociales, dando a conocer que cada pensionista cobra más dinero de lo que ha aportado en toda su vida laboral. Esto hace que el capital financiero llegue con su propia solución, privatizar el sistema de pen-

siones. Además, también hace que haya una reducción del salario obrero al disminuir las cotizaciones; este un beneficio para el empresariado.

Pero esto no solo está afectando a la persona jubilada que no puede cobrar su pensión. Directa e indirectamente, cada vez afecta más al trabajador con la reducción de salario, la edad efectiva de jubilación y la ampliación del periodo de la carrera profesional de cotizaciones. Al estudiante que no puede pagar las tasas de la universidad por su altísimo coste, que, aunque termine su carrera y esté bien preparado no le garantiza nada que pueda conseguir un trabajo y llegue a independizarse. O a los cientos y cientos de inmigrantes que son explotados, sin estar dados de alta en la seguridad social, sin poder cobrar un sueldo digno que les alcance para sobrevivir. Sin duda, desde la visión de un joven estudiante que procede del extranjero, es un deber mantener una estrecha relación entre los y las pensionistas y estudiantes. Porque el problema es el mismo para todos, y la privatización del capital financiero si sigue así abrirá más la brecha de las clases sociales y reducirá cada vez más las oportunidades



que cada ser humano se merece para que pueda tener una vida digna.

De hecho, los ataques que se planean incluyen una medida que, de aplicarse, tendría un efecto directo y muy grave para los jóvenes, que es la de atrasar la edad de jubilación, puesto que dificultaría el relevo generacional, complicando aún más nuestra ya de por sí complicada entrada al mercado laboral.

Por años han estado yendo al frente, y cada vez son más, los y las pensionistas que rechazan por completo esta y más injusticias que ha realizado el propio Estado. El pasado miércoles 14 de octubre del 2020, a un año de las grandes movilizaciones de los y las pensionistas de toda España, diversos grupos en todo el país se han mantenido firme en su lucha. Y con la mirada fija en su objetivo. Y aunque el mismo peso de los años haya gastado su cuerpo. Con lluvia, sol, frío o calor... el espíritu, el coraje y la fuerza aún siguen latente en ellos, porque “*gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden*”.

Jimmy Paca, estudiante de la UNED

¿Olvidar las conquistas sociales y resignarnos a la precariedad? ¡No nos resignamos! ¡Organicémonos!

En un debate fantasmagórico, hace unos meses se hablaba de reducir la semana laboral a cuatro días. Un debate que afirmamos fantasmagórico porque no ha surgido de ninguna movilización, porque no tiene ningún respaldo material en el mundo real, no es la expresión de la organización y movilización del movimiento obrero.

En el Estado español, de hecho, aunque la juventud puede que no lo sepa, hace ya muchos años se luchó por las 35 horas semanales: a pesar de pelear aquella batalla se perdió: ni CCOO ni UGT apoyaron aquella reivindicación que alcanzó 750.000 firmas bajo la forma de iniciativa popular y que sería finalmente rechazada en el Parlamento. Era el final del pasado siglo.

Es evidente que el desarrollo científico-técnico que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX permitiría una reducción de la jornada laboral, pero, como suele ocurrir, bajo la dominación de la burguesía los intereses de la mayoría social no prevalecen: reducir la jornada laboral se enfrenta a la lógica del capital, a la lógica de la minoría explotadora y expropiadora, la minoría que nos arrebató la vida.

Tanto es así que este siglo, lejos de significar una disminución de las horas de trabajo ha supuesto, cuando el capitalismo ha funcionado, firmar contratos en los que aparecen menos horas de las que se trabajan, o realizar horas extras, que muchas veces no se cobran; y cuando el capitalismo no ha funcionado ha sido aún peor: el desempleo disparado -en el caso de quienes tienen entre 16 y 25 años hoy se sitúa en el 40,45% - y la profundización en la precarización del mundo del trabajo.

En esta lógica de vida en la miseria, el ministro Escrivá ya avisaba en septiembre

de la intención del Gobierno de aumentar la edad de jubilación: “estamos hablando de dos incentivos -ha dicho- por un lado demorar la jubilación, lo que supondrá generar un sistema de incentivos que induzca a trabajar más y reformar fórmulas que permitan compatibilizar pensión y trabajo”. Por otro lado están trabajando en penalizar a quienes se jubilen de manera anticipada.

Hace unos días el primero de los incentivos se daba a conocer: “el Gobierno estudia premiar con un cheque a quienes se retiren después de cumplir la edad legal de jubilación”. Cuando la juventud tiene enormes dificultades para acceder a puestos de trabajo lo que propone el Gobierno de la burguesía es aumentar, en la práctica, la edad de jubilación: “una de las piedras angulares de la reforma de pensiones que prepara el Gobierno es lograr que los trabajadores se retiren más tarde sin elevar la edad legal de jubilación”. Y ni siquiera necesitan aumentar, más todavía, el límite legal, que ya fue ampliado en 2013, pasando la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

Esta es la realidad de la dinámica del capital en un contexto de crisis permanente: no tenemos trabajo y no vamos a tener jubilación. Podríamos afirmar que el sistema nos obliga a trabajar hasta la muerte. Pero incluso eso, trabajar hasta la muerte, parece que es algo que sólo podrán hacer quienes tengan el privilegio de tener un puesto de trabajo. Cada día es, pues, mayor la distancia entre las capacidades de la humanidad para reducir la jornada laboral y la explotación a la cual le somete la burguesía.

¡Pero nada de esto es ineluctable! ¡No nos resignamos! Como hemos señalado otras veces, claro que se puede abrir camino hacia un futuro que vaya más allá de la miserable oferta de vida que impone la burguesía: camino que pasa ineludiblemente por la organización del movimiento obrero, la conformación de una organización política que luche por los intereses de las clases trabajadoras incondicionalmente y que carezca de todo compromiso con la burguesía y sus instituciones.

Diego



La lucha por el derecho a la educación en el encuentro del CATP

El derecho a la educación sólo puede serlo a partir de una enseñanza pública de calidad y por tanto, además de laica, completamente gratuita y con todas las becas necesarias para que nadie se quede sin estudiar por razones económicas. Como ya se había recogido en el número anterior de Información Obrera, la tabla con los 14 puntos reivindicativos en torno a los cuales se convocaba el encuentro recogen la exigencia de derogación de las contrarreformas educativas y la dotación de fondos necesaria para el desarrollo de la actividad, considerando además la situación pandémica.

En todo el Estado, más allá de las particularidades en cada lugar, la ense-

ñanza pública está amenazada tras años y años de ataques. Y ante ello, de norte a sur y de este a oeste, son múltiples las experiencias de resistencia. En el encuentro del CATP del pasado día 7 hubo varias intervenciones que recogían algunas de estas experiencias, con la perspectiva de su extensión para que una movilización amplia, unitaria, pueda arrancar efectivamente reivindicaciones. Aportar para que todo esto vaya tomando forma es la tarea de quienes defendemos incondicionalmente el derecho a la educación. En el próximo número de Información Obrera publicaremos algunos testimonios en este sentido.

Corresponsal

Huelga y manifestaciones de enseñantes en Francia

El pasado martes 10 de noviembre, pese al confinamiento, tuvieron lugar decenas de concentraciones de protesta, en respuesta al llamado de los sindicatos FSU, FO, CGT y Solidaires. En París se reunieron 1500 personas, un número importante dado el contexto. La protesta es por la mala gestión de la enseñanza y la escasez de medios en este contexto tan complicado. Especialmente se exige la contratación del personal necesario, ya que en Francia, como aquí, las plantillas han sido diezmadas en los últimos años. La movilización de los trabajadores, con sus organizaciones es la única vía para ganar las reivindicaciones. Seguiremos informando.

Corresponsal

7 de noviembre: Encuentro estatal por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República



Convocado por el Comité por la Alianza de los Trabajadores y de los Pueblos (CATP), unos doscientos compañeros y compañeras realizaron vía internet un encuentro previsto inicialmente para abril de 2020. Eran dispares la representación de los participantes, los colectivos, cuya amplia superficie evidenciaba que la preocupación que les había conectado era la de innumerables activistas, militantes, formaciones: ayudar a que los trabajadores, la mayoría, se abran paso. Ese mismo día se conocía que Trump había sido derrotado.

Abrieron fuego cuatro organizaciones presentes en la Comisión Organizadora del CATP, por orden alfabético la Coordinadora 25S (Aitor Pazos), Información Obrera (Luis

González), Tribuna Socialista (Roberto Tornamira) y Unidad Cívica por la República (Ángel Pasero).

Sucedió un raudal de 35 intervenciones, durante dos horas y media, de sindicalistas, jóvenes, militantes políticos, inmigrantes, de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Cataluña, Madrid, el País Vasco, fallando la conexión con León y Canarias. Hablaban desde muchísimos combates. Y también representantes de diversas organizaciones y colectivos. Hay que destacar la sintonía del Encuentro, por ejemplo, con los trabajadores de Aciturri, en huelga contra el cierre, con los jóvenes y los inmigrantes, exponentes de la lucha común contra la destrucción de la clase obrera, de los derechos.

El compañero Roberto Tornamira presentó el MANIFIESTO DEFINITIVO, del que presentamos un extracto en la página siguiente, y un resumen de las iniciativas propuestas para compartir con cuantos podamos. Daremos más información en números posteriores. El manifiesto podéis encontrarlo completo en nuestra web:

<http://www.informacionobrera.org/manifiesto-del-encuentro-estatal-del-7-de-noviembre/>

Iniciativas presentadas y apoyadas por el Encuentro

Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.

Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.

Apoyo a la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la realización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pensiones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.

¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensionistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Construiremos La República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.

Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden ser a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones...

Tomamos posición contra la desindustrialización de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.

Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o imputados judicialmente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquiera otra lucha por los derechos sociales y democráticos.

Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expulsados del ejército por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.

Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por la Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.

El CATP y las organizaciones que han participado en la Conferencia del 7N, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.

Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas... y que se difunda su contenido profusamente.

7 de noviembre de 2020



En los últimos seis años el CATP ha promovido reuniones a lo largo de todo el Estado español para organizar y aunar la lucha, recogiendo las reivindicaciones



Extractos del manifiesto aprobado en el Encuentro por los derechos y por la República

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan por ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social: los trabajadores y trabajadoras, los desempleados y desempleadas, los que sufren un ERTE y temen un despido definitivo, los que sufren el aislamiento por el coronavirus, los estudiantes, los jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio, a los que protegen a niños, niñas y adolescentes a los pensionistas y trabajadores que defienden el sistema público de pensiones, a la población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud alas mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial, a las familias en el umbral del hambre y las que temen por la vida de sus mayores en las residencias, a los autónomos.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de disfrazar la lucha de clases, se fomentan formas de autoritarismo y represión para ahogar las exigencias de la mayoría.

Los compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que **gobierno quien gobierne, las reivindicaciones se defienden**. Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

- la **derogación íntegra de las reformas laborales**,
- la **derogación de las reformas de pensiones** de 2011 y 2013, y una auditoría que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social,
- la **derogación de la «ley Mordaza»**,
- la **derogación del artículo 135.3 de la Constitución**,
- la **derogación del Arto. 315.3 del Código Penal**,
- la **defensa de la sanidad y la educación públicas**, y un presupuesto de emergencia,
- la **devolución al Estado de los fondos entregados a la banca privada**. Y crear la banca pública,
- un plan de inversiones y empleo público,
- la **libertad de los presos políticos**, la amnistía y el derecho de los pueblos a decidir,
- la **derogación íntegra de la LOMCE** y de todas las contrarreformas educativas,
- la **abolición de la Ley de Extranjería**,
- el **cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)**,
- la **exhumación de todas las víctimas del franquismo**, la anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad.

Siguen varios párrafos densos que se podía resumir en esta forma, barajada en el Encuentro:

Hemos compartido una experiencia común: cómo la satisfacción de esas reivindicaciones se enfrenta a un muro infranqueable, constituido por el poder judicial, las fuerzas del orden, el ejército, la Monarquía, instituciones heredadas todas del franquismo y sometidas a los intereses del poder financiero. Y a la presión enorme de ese entramado sobre las organizaciones

que representan a la mayoría para que renuncien a su razón de ser y actúen como instituciones del Régimen. Por ello, manifestamos a toda la población trabajadora una conclusión: **avanzar en la lucha por las reivindicaciones, aun las más elementales, exige avanzar hacia un verdadero cambio político y social, en el camino de una República del pueblo y para el pueblo, de todos y cada uno de los pueblos del Estado Español.**

El Manifiesto explica:

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. **República** es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. **República** son servicios públicos inviolables e imprivatizables, protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. **La República** la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Los trabajadores y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.

Y concluye:

Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. La Conferencia del 7N20 es un punto de partida para:

- **reunir a compañeros y colectivos** que compartan nuestro combate en comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, localidades...
- **reforzar la información, el intercambio, la acción común.**
- **ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos** a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.

Manifiesto de sindicalistas de la industria (extracto)

ES NECESARIA LA MÁS AMPLIA MOVILIZACIÓN PARA IMPEDIR LOS DESPIDOS

Es necesaria la movilización en la industria a nivel estatal para que los trabajadores luchemos juntos, con nuestros sindicatos, para exigir ningún despido y ningún cierre de fábricas.

Exigimos al Gobierno que derogue las reformas laborales y tome todas las medidas a su alcance para impedir que siga habiendo despidos, planteando si es necesario la nacionalización de empresas. [...]

Queremos extender y dar a conocer ampliamente este manifiesto, para lo que necesitamos coordinarnos y recoger nuevos apoyos de sindicalistas de todo el país, animamos a constituir comités de apoyo a este manifiesto en cada población o zona, con el fin de hacerlo público, extenderlo y dirigirlo al Gobierno.

Primeros firmantes:

1. **José Antonio Zarza Sánchez**, miembro del Comité de Empresa Plastic Omnium, Barcelona.
2. **Antonio Hidalgo Callejas**, miembro del Comité de Empresa Plastic Omnium, Barcelona.
3. **Manuel Iniesta Martín**, miembro del Comité de Empresa Plastic Omnium (CCOO), Barcelona.
4. **Miguel García Pérez**, miembro del Comité de Empresa Plastic Omnium, Barcelona.
5. **Fernando Jiménez Naranjo**, presidente Comité Empresa (CCOO), Nissan Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
6. **Víctor González**, afiliado de CCOO en Volkswagen (Barcelona).
7. **Santiago Jiménez**, miembro de la ejecutiva de CCOO Industria Sevilla.
8. **José María Ollero**, sindicalista de CCOO Industria, Sevilla.
9. **Jesús Sanvicente**, afiliado CIG, Galicia.
10. **Antonio Esteban**, delegado de CCOO en empresa de gráficas, Getafe (Madrid).

11. **Francisco Cepeda**, delegado de CCOO en Zugarto (Fuenlabrada-Madrid) y miembro de la ejecutiva del sector de Gráficas en Madrid de CCOO.
12. **Pachi Andrade**, miembro del comité de empresa de Smurfit-Kappa (Pinto) y de la ejecutiva del sector de Gráficas en Madrid de CCOO.
13. **Pablo García Cano Locatelli**, secretario del Comité de Empresa de John Deere y miembro de la ejecutiva de CCOO Industria Madrid.
14. **Florencio Andrés**, miembro del comité de empresa de John Deere, CCOO, Getafe (Madrid).
15. **Ernesto Moñino**, miembro del comité de empresa de John Deere, CCOO, Getafe (Madrid).
16. **Daniel Andrés**, presidente del comité de empresa de Coca-Cola Fuenlabrada, CCOO.
17. **Oscar Abanades**, miembro del comité de empresa de Peugeot (PSA Villaverde), Madrid, CCOO.
18. **José Lagos**, presidente del comité de empresa de Corrugados (CCOO), Getafe, Madrid.
19. **Cesar Serrano**, presidente del comité de empresa de Schneider Electric, Griñón (Madrid).
20. **Rosa Autric**, miembro de la ejecutiva de CCOO Comarca Sur de Madrid.

La responsabilidad sindical aparece a modo meramente informativo y a título individual.

Se pueden enviar nuevas firmas en apoyo de este manifiesto, incluyendo nombre y apellidos, responsabilidad y sindicato, empresa o sector, ciudad o provincia al correo-e: pablogarciacano@yahoo.es

Encontraréis este manifiesto en nuestra web

La plantilla de Faurecia llegará "hasta donde sea necesario" para defender los puestos de trabajo

Un centenar de trabajadores de Faurecia se han concentrado este martes ante la planta de Abrera en la primera de las movilizaciones previstas en contra del ERE presentado por la empresa, que afecta a 160 de los 308 trabajadores.

Hay incertidumbre de la plantilla con el plan presentado por la empresa, que no quedará en los 160 despidos, será el camino de dismantelar la planta de Abrera.

Una vez más la clase obrera tiene la necesidad de la unidad para defender la industria que se está dismantelando con despidos y cierres de empresas.

NO A LOS DESPIDOS DE FAURECIA ABRERA

El día 10 la protesta ha contado con el apoyo de trabajadores de Nissan y Seat, principales clientes de Faurecia, de operarios de empresas vecinas y del alcalde de Abrera.

El comité de empresa denuncia que la empresa ha preparado esta situación perdiendo la concesión del Seat León y prescindiendo de la planta de pintura.

Es un proveedor mundial de asientos de automóvil, interiores de vehículos y control de emisión. Está en 34 países. Tiene más de 100.000 empleados y en España varias plantas.

Huelga en el puerto de Bilbao

Información Obrera os invita a leer el artículo publicado en la revista Tribuna Socialista con la que compartimos espacio en el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) respecto a la dura huelga que mantienen los trabajadores de la estiba del puerto de Bilbao contra la desregulación y la pérdida de derechos que conlleva.

<https://tribunasocialista.com/2020/11/02/entrevista-a-jose-luis-garcia/>

¡Una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social!

Desmontar las falsedades que justificaron crear el Pacto de Toledo

El sistema de la Seguridad Social española, que está fundamentado en un sistema de reparto, se enfrenta a una seria ofensiva organizada a través del conjunto de recomendaciones aprobadas por una gran mayoría de diputados de la Comisión del Pacto de Toledo. Si no se corrigen y se detiene los efectos perniciosos de esas recomendaciones, los 9 millones de pensionistas actuales y sobre todo los futuros pensionistas, verán fuertemente debilitados sus derechos a una pensión pública digna.

Lo más sobresaliente es que entre las recomendaciones no se prevea la reparación del daño causado a las cuentas de la Seguridad Social, particularmente a sus reservas, por los saqueos continuados, durante años, que las cotizaciones sociales han sufrido a manos de los diferentes gobiernos. Nada se dice de las promesas de los partidos que apoyan al gobierno sobre la derogación de las reformas laborales, las reformas de las pensiones de Zapatero y Rajoy, ni del destape de las bases máximas de cotización.

A corto plazo, para contentar a los pensionistas actuales, se apuntan problemas concretos, sin implicarse en soluciones concretas, o bien se mantiene lo conseguido hace un par de años sobre mantener el poder adquisitivo según el IPC. Pero, a medio y largo plazo, se introducen recomendaciones que sientan las bases de una modificación sustancial del sistema de reparto que afectará de lleno a los actuales trabajadores activos cuando se jubilen. La Airef habla de un sistema sostenible, pero a un nivel asistencial, con una reducción de la tasa de sustitución del 30% respecto a la situación actual.

En los últimos meses se ha conseguido algo importante. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas, y muy especialmente a los trabajos y exigencias de la COESPE, se reconoce que durante años se estaban financiando con cotizaciones "gastos indebidos", es decir, que no eran de la Seguridad Social. Puede ser un paso, pero ¿de qué sirve reconocer que ha habido una indebida utilización de los recursos de la Seguridad Social, si al mismo tiempo no se corrigen sus dañinos efectos?

A pesar del barniz de progresismo que todos sus partidarios otorgan al Pacto de



Pensionistas de Madrid contra el Pacto de Toledo, ante las Cortes el 11 de noviembre

Toledo, es necesario no olvidar los antecedentes. En 1994, cuando se aprobó la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), representante directo de la burguesía catalana y española, con el objetivo de "garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits", se señalaba ya el centro sobre el que gravitarían las reformas. En la exposición de motivos se señaló como obstáculo para resolver la problemática de la evolución presupuestaria de la Seguridad Social, a "la estructura financiera del sistema de Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto".

Precisamente, lo que se pretende organizar con las recomendaciones del Pacto de Toledo que se discutirán próximamente en el pleno del Congreso es la dislocación del funcionamiento del régimen de reparto en que se basa nuestra Seguridad Social. Aplicando así la línea marcada desde la creación del Pacto

de Toledo. El objetivo a donde apuntan las modificaciones y reformas propuestas es a un cambio de modelo de Seguridad Social.

Desmontar las falsedades que justificaron el relato de una Seguridad Social en crisis es una necesidad urgente. Sobre unas bases económicas falseadas por el desvío de las cotizaciones, se aprobó la creación de la Comisión que se llamó del Pacto de Toledo. La propuesta de la COESPE de exigir una auditoría pública que determine la magnitud del saqueo para restablecer la verdad de lo ocurrido, permitirá crear bases organizadas sólidas para revertir las recomendaciones adoptadas.

Por ello es importante que, junto a no rotundo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, se busque la unidad de todas las organizaciones y colectivos para la recogida masiva de firmas por la exigencia de una auditoría pública.

Juan Miguel Fernández

Defender las pensiones y la Seguridad Social es un objetivo de toda la clase obrera

Así lo ha entendido la asamblea de delegados de la FeSP de UGT del Vallés Occidental, con todos los servicios públicos representados en ella (administración local, sanidad, limpieza viaria, Atención Domiciliaria, etc.) adhiriéndose a la campaña que exige una auditoría que ponga negro sobre blanco a dónde han ido a parar las cotizaciones de millones de trabajadores, y que ponga en evidencia también el expolio al que se ha sometido las cuentas de la Seguridad Social. Así lo han entendido igualmente tanto la plataforma en defensa de las pensiones, como el centenar largo de firmas recogidas hasta ahora entre los participantes de las concentraciones de cada lunes en Sabadell.

Próximamente se va a trasladar la campaña a los centros de trabajo, explicando el contenido de la misma y llamando a los trabajadores y a las diferentes secciones sindicales a sumarse a la misma. Los pensionistas, toda la clase obrera, tenemos derecho a saber qué se ha hecho (y qué se hace) con nuestras cotizaciones. En un momento en el que todos los poderes al servicio del régimen pretenden demostrar la inviabilidad del sistema de reparto en el que se basan nuestras pensiones, desmontar esa falacia es fundamental para toda la clase obrera, para los pensionistas y para los que están en activo.

Rafa Aguilera, Sabadell

CAMPAÑA por una AUDITORIA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL en defensa del sistema público de pensiones

RECOGIDA DE FIRMAS LAMIAKO (frente estación del Metro) Martes 10 de noviembre 11:30 - 14 horas

Nuevo escándalo por corrupción

¿Sacrificar a Juan Carlos para salvar la Monarquía?



Juan Carlos y su primo Álvaro de Orleans

La fiscalía acaba de iniciar una investigación sobre el rey emérito. Es la tercera investigación que se inicia sobre el mismo por asuntos relacionados con la corrupción. Teniendo en cuenta que al emérito no se le puede investigar por sus fechorías antes de la abdicación es escandalosa esta situación, amparada por jueces e instituciones, incluyendo al Gobierno.

A la investigación por el asunto de las comisiones por el AVE a La Meca y una cuenta en Suiza se suma ahora la investigación por la utilización de tarjetas opacas por parte del emérito, de la reina Sofía y de varios otros miembros de la familia real.

En este caso el dinero provendría de un empresario mexicano, Allen de Jesús Sanginés-Krause y se utilizaba como testaferrero al coronel del ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza que fue ayudante de campo de Juan Carlos. Además, en este caso como en otros, el dinero era además opaco

fiscalmente por lo que el “ejemplar” monarca no pagaba impuestos, lo que ya forma parte de la tradición borbónica española.

En los otros casos la fiscalía solicitó el archivo del caso de los 65 millones cobrados por las comisiones del AVE, porque este atraco se produjo en la época en que parece ser que los monarcas españoles pueden cometer delitos impunemente. También está abierto en Suiza un procedimiento de investigación a la Fundación Zagatka, propiedad de un primo del rey, Álvaro de Orleans, que tenía como beneficiarios a Juan Carlos y sus hijos Felipe, Elena y Cristina. Ahora este caso ha dado otro giro bochornoso al quitar de beneficiarios a los Borbones para tratar de exculparlos, y señalar que el hecho de que fuesen beneficiarios era por la gran labor hecha por el Borbón para traer la democracia a España. No se esfuerzan en buscar excusas creíbles.

Esta fundación pagó con fondos de Zagatka numerosos vuelos privados del monarca. El pasado mes de marzo, la fundación atesoraba alrededor de 10 millones de euros, según su propietario. Se calcula en más de 3 millones el importe los vuelos privados pagados al Borbón, su familia y su querida.

Felipe VI no sabe nada

En la campaña de la prensa y de los partidos del régimen, incluido el gobierno progresis-

ta, ahora todo se centra en salvar a la Monarquía para lo que tratan de aislar de estos escándalos a Felipe VI. La actuación de jueces y fiscales es tan vergonzosa como en el caso del juicio a la infanta Cristina. Parecen abogados defensores en vez de jueces o fiscales. El Gobierno insiste en que en el caso del emérito hay que defender la presunción de inocencia y que en cualquier caso una cosa es el padre y otra el hijo. Por eso se esfuerzan en decir que no es un problema de la monarquía, se niegan a investigar y ni siquiera permiten que el CIS pregunte sobre la Monarquía en sus encuestas.

Para más INRI, lo que sí ha abierto la fiscal es una investigación para saber cómo ha llegado al periódico la noticia de que se está investigando de nuevo al emérito. Un episodio de clara responsabilidad criminal por parte de este régimen que protege la corrupción y que con tal de salvar a la Monarquía y a Felipe VI no dudarán en hacer cualquier cosa incluido sacrificar a Juan Carlos.

Salvar a un rey, el vigente, que no se enteraba de que en su casa todo el mundo robaba y él era beneficiario de una cuenta que aglutinaba lo robado. Si en cualquier momento la República es un régimen necesario, en estos momentos se convierte en una cuestión de salud pública.

Jesús Béjar



La actualidad de la Revolución de Octubre de 1917

Este 7 de noviembre se cumple el 103 aniversario de la toma del Palacio de Invierno por parte del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado. Toma del poder que fue ratificada el día siguiente, por abrumadora mayoría, por el Congreso General de los Soviets de Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia, en el que los delegados del partido bolchevique adquirieron la mayoría y actuaron en alianza con los socialistas revolucionarios de izquierda, parte de los mencheviques internacionalistas y otras fuerzas que se alinearon con la revolución.

Ver artículo completo en <http://www.informacionobrera.org/actualidad-de-octubre-1917>

Comité de Redacción

PORTUGAL: Prevenir el colapso, salvar el Servicio Nacional de Salud

¿Cuántos usuarios del SNS con enfermedades crónicas han estado esperando durante meses para una consulta presencial, cuántos tratamientos se han retrasado, cuántos diagnósticos, algunos de ellos de cáncer, no se han hecho?

Desafortunadamente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos diariamente (...).

Al mismo tiempo, la resistencia de la población y del personal médico y de enfermería en defensa de esta conquista de Abril, considerada como una de las más importantes por la gran mayoría de los portugueses, ha permitido, a pesar de los sucesivos golpes, que lo esencial de su estructura permanezca, como un servicio de salud pública y universal para todos. (...)

Es en esta situación de grave crisis económica, social y sanitaria - acelerada por la

pandemia - en la que tiene lugar el debate y la votación del proyecto de Presupuesto del Estado para 2021, presentado por el Gobierno en la Asamblea de la República. (...)

Un estudio de Eugénio Rosa- famoso economista de la CGTP- sobre este proyecto de Presupuesto del Estado (...), concluye:

"En 2020, el gasto del SNS financiado por los ingresos fiscales alcanzará los 10.311,2 millones de euros y en 2021 será de 10.315,2 millones de euros, es decir, sólo 4 millones más. Este es el gran refuerzo del SNS, tan "aclamado" por el actual Gobierno. ¿La izquierda que defiende el SNS quedará pasiva ante todo esto, porque es demasiada austeridad y peligrosa porque está en juego la salud?"

La respuesta que esperan y desean los profesionales de la salud (...) es que las or-

ganizaciones sindicales que los representan se movilicen en unidad para defender sus carreras profesionales con derechos, un régimen de dedicación plena al SNS y un aumento del número de profesionales que responda a las necesidades y permita fortalecer el SNS.

Es la misma respuesta que los millones de usuarios de los Centros de Salud y Hospitales Públicos (...) aguardan de las fuerzas políticas que se reivindican del 25 de abril y sus logros (...).

Para ayudar a la movilización en la unidad, éste es el camino en el que se insertan los militantes del POUS, agrupados en torno a El Militante Socialista (MS).

Extractos de una declaración de O Militante Socialista

Declaración del Partido de los Trabajadores de Argelia

El confinamiento indiscriminado supuestamente sanitario al que ha recurrido el gobierno a modo de respuesta a la Covid-19, ha provocado un hundimiento social y económico sin precedentes (...).

La recesión económica se instala a causa del tremendamente brutal hundimiento del poder adquisitivo como consecuencia de la caída del dinar y de la especulación (...).

La gestión caótica de la COVID-19 por el gobierno ha puesto al descubierto la espantosa realidad (...) del sistema sanitario provocada por decenios de abandono por parte del Estado y de contrarreformas que han provocado una hemorragia mortal en materia de personal sanitario sometido a condiciones inhumanas de trabajo, culminando en la violenta intrusión de la oligarquía depredadora en este sector vital.

El anárquico inicio de curso escolar y universitario inician la destrucción de la enseñanza pública emprendida ya con la enseñanza a distancia, con la generalización de la desreglamentación (...).

Nuestro país, pese a ser rico en recursos naturales y potencialidades humanas, ha quedado exangüe (...).

Los trabajadores se levantan contra esta carrera destructiva (...). Y ese mismo combate por la supervivencia acaba de expresarse (...) en el referéndum constitucional (...).

Sí, para organizar el rescate de la mayoría del pueblo empujado hacia la decadencia, el rescate de los trabajadores, de

los agricultores, pequeños comerciantes, artesanos, etc., para organizar la salvaguarda de la nación amenazada en su integridad, para restablecer las conquistas de la revolución de noviembre de 1954 y de la independencia nacional, para reunir las condiciones de la reconstrucción del país, hay una sola salida conforme a la democracia: la reunión de una Asamblea Constituyente Nacional Soberana que, con el respaldo de la legitimidad y del mandato popular, tenga el valor y la fuerza de definir, a partir de las aspiraciones populares libremente expresadas, la naturaleza del régimen a instaurar, las políticas conformes a las necesidades exclusivas de los trabajadores, de la juventud, de los amplios sectores explotados y oprimidos, es decir, de la mayoría del pueblo, políticas conformes, pues, solo a los intereses de la nación en ruptura con el saqueo local y extranjero.

Secretariado Permanente del Partido de los Trabajadores (Extractos) Argel, 2 de noviembre de 2020



Nuevo confinamiento en Francia

Desde que Macron anunciara, el pasado 28 de octubre, el nuevo confinamiento del país, un aluvión impresionante de artículos, pronunciamientos, comunicados sindicales... ilustran el clima de desconfianza, rechazo e indignación que crece entre la población.

Clima que repercute en la propia Asamblea Nacional, donde el 4 de noviembre se debatía la prolongación del estado de emergencia sanitaria hasta el 16 de febrero. Finalmente solo pudo aprobarse hasta el 14 de diciembre.

En el ámbito local, decenas de alcaldes desafían al poder autorizando la apertura del pequeño comercio, cerrado por el gobierno al considerarlo «no esencial», mientras empresas como Amazon multiplican sus beneficios a costa de la ruina de la mayoría. Esta multinacional ha triplicado sus beneficios en el 3º trimestre de 2020 respecto del año anterior.

Los sanitarios denuncian la saturación de los hospitales, el agotamiento de los profesionales, las terribles condiciones de los enfermos que pasan la noche amontonados en los pasillos.

Una carta firmada por economistas, periodistas y cargos públicos aparecida en la web del semanario Le Point, el 2 de noviembre, denuncia «una precariedad nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial». Millones de personas tienen que recurrir a las ONG solicitando asistencia para las necesidades más básicas.

Profesores y padres de alumnos exigen la contratación urgente de personal docente y de apoyo para los centros escolares y denuncian, junto con sus organizaciones, el aumento de las desigualdades impuesto por la «enseñanza» no presencial.

Isabel Cerdá

Biden ha ganado las elecciones, la crisis institucional continúa

Los Estados desindustrializados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania que en la elección del 2016 votaron por Trump, ahora respaldaron a Joe Biden y al Partido Demócrata. Los comentaristas hablan de una nueva «muralla azul», en relación al color representativo demócrata. Una profunda grieta social se ha acrecentado. Trump no es la causa, es el efecto. Pero su política profundizó esta fractura: calificó de «Deep States» (Estados Hundidos) a los sectores que él no controlaba y castigó con políticas irracionales a los Estados y ciudades gobernados por los demócratas.

Dentro del Partido Republicano se formó un sector opuesto a Trump y partidario de la alianza electoral en torno al Partido Demócrata. Es algo excepcional, inédito. Pero el hecho de que en nombre de la estabilidad y del Estado un segmento de republicanos no siguiera a Trump, implica que el Partido Republicano está roto. Ahora bien, si el Partido Republicano está quebrado, el Partido Demócrata también lo está.

La crisis del Partido Demócrata

Dentro del Partido Demócrata se formó un poderoso movimiento con base en sindicatos, en el movimiento organizado latino y en las comunidades de color, en apoyo a la candidatura socialista de Bernie Sanders, atrayendo a un gran segmento de la juventud y algunos dentro del movimiento sindical. Organizaciones con fuerza nacional están dentro del Partido Demócrata, no sólo a nivel parlamentario, sino también organizaciones políticas con personalidad propia, como Democracia Socialista de América y Nuestra Revolución. La cúpula del PD movilizó todos los recursos posibles del partido para imponer la candidatura de Joe Biden contra Bernie Sanders.

Cuando Sanders capitula para apoyar la candidatura de Biden, impide la construcción de una tercera alternativa favorable a la construcción de un partido nue-

vo, con un amplio movimiento en su base y capaz de unirse tras él.

Pero de pronto sobrevino el movimiento Black Lives Matters. Mientras Democracia Socialista de América y Nuestra Revolución dedicaron sus esfuerzos al apoyo electoral a Biden, emergió de los Estados Unidos profundos un espectacular movimiento de masas de carácter espontáneo, sin ninguna dirección conocida ni centralizada.

Black Lives Matters representa de fondo el problema de la crisis del sistema capitalista, y a eso nadie le da respuesta. Son exigencias que continuarán bajo el gobierno demócrata.

Trump deja tras de sí un sistema político con hondas grietas y secuelas sociales causadas por la mayor crisis económica desde los años treinta. Es “tiempo de curar” dijo Biden en su discurso de celebración de la victoria ayer 7 de noviembre. Pero no son los dolores del crecimiento, sino que son dolores de la vejez.

Si bien es cierto que se constituyó una gran alianza que canalizó el voto masivo contra Trump, nadie puede obviar las demandas de la mayoría de la sociedad estadounidense afectada por la pandemia. El voto que puso a Biden y al Partido Demócrata en el poder exige respuestas a sus demandas, que hoy se concentran en la resolución de estos problemas:

Millones de desempleados.

Millones que enfrentan desalojos de viviendas.

Millones sin seguro médico, exigiendo un sistema único y público.

Justicia en el sistema (BLM)

Problema de los migrantes latinos (legalización para todos; DACA, TPS, derecho de asilo, parar las deportaciones y la separación de familias, cerrar el sistema de cárceles privadas).

El nuevo gobierno no parece tener la capacidad de resolver

De modo que el futuro gobierno demócrata tiene el compromiso de responder a sus electores sindicales (como ya lo hemos visto, las grandes federaciones contaron con grupos de trabajo de la campaña demócrata), al movimiento latino, y al movimiento Black Lives Matters.

La demanda universal que cubre a todos los sectores de la sociedad estadounidense es resolver de una vez el problema de la pandemia del coronavirus. La desastrosa



gestión de la pandemia ha ocasionado la muerte de más de 230.000 personas.

Nos espera una profundización de la crisis institucional sobre el fondo de malestar social

Trump ha declarado que va a contestar judicialmente la victoria electoral de Biden. Una multitud se ha posicionado frente a la Casa Blanca hasta que Trump acepte la derrota.

El problema es muy serio. Lo que anuncia Trump se asemeja a un golpe de Estado.

Abogados constitucionalistas concluyen que las alegaciones de Trump no podrán suspender el proceso electoral. El objetivo de Trump no tiene futuro en las Cámaras, pero, de todas maneras, las acciones legales y las acusaciones de fraude electoral no tienen otro fin que mantener sus bases agitadas, lo cual profundiza la crisis institucional.

Lo que está en juego es la «democracia liberal»

Los portavoces a escala internacional del capital financiero han saludado la victoria de Biden como una victoria de la «democracia liberal». O sea, de los regímenes parlamentarios con los que se cubre la dominación de la clase capitalista. Pero lo que refleja la crisis en Estados Unidos es que la democracia liberal está herida de muerte. De entrada, las instituciones parlamentarias elegidas sufren, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, un vaciamiento general de su contenido. La tendencia bonapartista es un fenómeno universal porque la burguesía no tiene otra forma de responder al hundimiento del sistema capitalista que por medios autoritarios y liberticidas. Cuestión que solo será resuelta en la lucha de clases.

Rodrigo Ibarra
9 de noviembre

California (Estados Unidos)



[Ver artículo completo en <http://www.informacionobrero.org/elecciones-usa/>]

Me abono a
**INFORMACIÓN
OBRERA**

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ - BANKIA ES87 2038 1170 3760 0058 6903

6 NÚMEROS: 9 €

12 NÚMEROS: 18 €

24 NÚMEROS: 36 €

PDF, 24 NÚMEROS: 15 €

